



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN SALA CIVIL

Medellín, cinco (5) de septiembre de dos mil veintitrés (2.023)

Magistrado: JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS
Apelación de auto: 05001 31 03 003 2018 00514 01

Proceso: Ejecutivo.
Demandante: RAMIRO OSPINA ISAZA.
Demandados: MARIO VICENTE TORO SOTO y otros.
Extracto: Se precisa lo referente a la cautela de secuestro en cuanto a que no procede un doble decreto, pero permanece la comisión que se hizo; aunado que no se configura ninguna de las causales previstas para el levantamiento del secuestro. Reforma.

ASUNTO A TRATAR

Se resuelve la apelación interpuesta por la parte demandada, contra el auto calendarado el catorce (14) de julio de dos mil veintidós (2.022), dimanado del JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS de Medellín¹.

ANTECEDENTES

Mediante la decisión recurrida se decretó el secuestro sobre varios inmuebles de los demandados², providencia en la que también se comisionó para las respectivas diligencias.

¹ Archivo 14 Cuaderno de ejecución.

² Ello sobre los bienes con Matrículas Inmobiliarias (M.I.): 1) 001- 874996, propiedad del codemandado DANIEL TORO MEDINA; y, 2) 103-23122, 103-23113 y 103-11453, cuya titularidad del derecho de dominio corresponde a Agroindustrias La Perla S.A.S.; no se hizo lo mismo frente a los bienes con M.I. 001-875015 y 001-875034, pues no se acató el

Frente a tal decisión, la parte demandada presentó los recursos de reposición y en subsidio apelación, señalando que los secuestros resultan innecesarios, excesivos y desbordados, pues aparte que se están causando intereses, el embargo ya imposibilita la enajenación, garantías suficientes para el demandante.

Agregó que no se ha determinado el valor de los bienes embargados ni el de las obligaciones en cobro, aunado a que debe evitarse medidas adicionales lesivas de derechos, pues en el bien identificado con M.I. 001- 874996 el codemandado DANIEL TORO MEDINA habita con su familia, entre los que está una menor de edad³.

En el traslado del caso el demandante expuso que no se trata de medidas adicionales, y que la falta de liquidación no es impedimento para el secuestro, medida que viene desde el año 2.018 y es necesaria para el remate. Resaltó que ha brindado plazos y oportunidades a los demandados para pagar, e incluso *“les deshipotecó”*, pero estos no solucionan la obligación, siendo estos recursos un acto para dilatar, estando el actor afectado ya que tiene 71 años de edad. Por lo mismo solicitó confirmar la decisión atacada⁴.

En decisión del 2 de agosto de 2.023⁵ el *a quo* decidió no reponer, explicando que el embargo y el secuestro garantizan la obligación ejecutada; y citando el artículo 599 del C. G. del P., adujo que estas medidas proceden desde la presentación de la demanda, siendo necesarias para el remate de los bienes, sin que lo argüido por el recurrente constituya causal para su levantamiento.

requerimiento contenido en el auto del 24 de febrero de 2.022, referente a *“allegar copia actualizada de los Certificados de Tradición y Libertad”*.

³ Archivo 16 cuaderno de ejecución

⁴ Archivo 17 de igual cuaderno.

⁵ Archivo 19 ejusdem.

Subsidiariamente, concedió la alzada, la que se resuelve, previas:

CONSIDERACIONES

El auto que resuelve sobre una cautela es apelable según lo normado por el artículo 321.8 procesal civil, por lo que seguimos el estudio del asunto en los términos de los artículos 326 y 328 ídem, anotando que el recurso de apelación busca que el Superior estudie el asunto decidido en primera instancia, con el fin de revocarlo o reformarlo, sentido en el cual se dirigirá el siguiente análisis.

Las medidas cautelares tienen como fin asegurar, conservar o anticipar la efectividad de los derechos que puedan llegar a reconocerse en una resolución judicial, o como lo indica la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia:

“El fin principal de las medidas cautelares es garantizar la efectiva ejecución de la providencia impidiendo que el perjuicio ocasionado al derecho sustancial se haga menos gravoso, o que no haya manera de cumplir la obligación que declare la sentencia por desaparecer o disminuir los bienes que fueron parte del patrimonio del deudor.” (SC5680-2018).

Particularmente, en los procesos ejecutivos el ordenamiento procesal contempla el “embargo” y “secuestro”, los que según el artículo 599 del C. G del P. pueden solicitarse desde la presentación de la demanda.

En las presentes mediante auto del 17 de septiembre de 2.018, se libró el mandamiento de pago deprecado, ante el cobro de diez (10) pagarés, cada uno por valor de \$50´000.000.00, más los respectivos intereses de mora (archivo 04 Cuaderno Principal – Primera instancia).

Simultáneo con la anterior decisión, y toda vez que el actor lo solicitó, se decretó el embargo y secuestro de los inmuebles identificados con

las Matrículas Inmobiliarias 001-874996, 001-875015 y 001-875034, propiedad de DANIEL TORO MEDINA; así como los numerados 103-23122, 103-23113, 103-11453, 103-20900, y 103-11457, pertenecientes a AGROINDUSTRIAS LA PERLA S.A.S. (folio 4, archivo 01, Cuaderno 002 de la primera instancia)⁶.

El 25 de junio de 2.019 se profirió auto ordenando seguir adelante la ejecución⁷, y luego de la liquidación de costas, el asunto pasó a ejecución, estando actualmente en el JUZGADO CUARTO de tal especialidad, el que nuevamente decretó secuestros mediante la providencia hoy recurrida, cuando lo pedido por activa había sido *“la elaboración del despacho comisorio”*⁸.

Valga precisar que si el secuestro ya había sido decretado, resultaba insustancial que se repitiera ídem orden sobre el mismo bien. Entonces, la cautela permanece y su correspondiente comisión, pues ello es ineludible de cara al eventual remate.

De otro lado, las situaciones para levantar el secuestro son tratadas por el artículo 597 del C. G. del P., donde el argumento en que se apoya el recurrente, como es la proporcionalidad y que con su grupo familiar (que incluye una menor de edad) habita uno de los inmuebles, son circunstancias que no se enmarcan en tales causales; ni tampoco el ordenamiento procesal limita la práctica de la diligencia de secuestro en tales eventos.

A lo anterior se suma que la ausencia del avalúo o la estimación del crédito mismo, tampoco son causales legalmente previstas para

⁶ No obstante, el 7 de diciembre de 2.018, por pedido de ambas partes, se decidió, entre otras, el levantamiento de las cautelas decretadas sobre los bienes con M.I. 103-20900 y 103-11457 (archivo 07 Cuaderno Principal – Primera instancia).

⁷ Archivo 09 cuaderno 001 principal.

⁸ Lo encerrado en comillas consta a folio 3 del archivo 002 en el cuaderno de ejecución.

levantar embargos; sin embargo, en las presentes obra liquidación de lo cobrado, la cual se aportó el 18 de febrero de 2.022, y aunque hubo traslado la parte hoy recurrente, esta guardó silencio. Valga anotar que para ese momento ello se cuantificó en \$914'384.394,⁹⁷.

Conforme a lo anterior, resulta acertada la comisión dispensada pues la práctica del secuestro procede “... *una vez se haya inscrito el embargo...*” y “... *debe perfeccionarse antes de que se ordene el remate...*”, tal como lo dispone el artículo 601 procesal civil, máxime cuando la parte demandada no ha procedido conforme el artículo 602 del mismo Estatuto, ni ofreció otras medidas que ofrezcan seguridad para garantizar el cumplimiento de la sentencia.

En conclusión, la decisión apelada se reformará precisando lo referente al secuestro sobre los mismos bienes ya cautelados, pero permanece la comisión que se ordenó de cara a materializar tal medida y tendiente a asegurar los resultados de la decisión judicial¹⁰.

Sin costas en cuanto al recurso que se resuelve.

Por lo expuesto el Tribunal Superior de Medellín;

RESUELVE

⁹ La aludida liquidación consta a folios 6 y 7 del archivo 002 en el cuaderno de ejecución.

¹⁰ La Corte Constitucional ha dicho que las medidas cautelares garantizan “*el ejercicio de un derecho objetivo, legal o convencionalmente reconocido (por ejemplo el cobro ejecutivo de créditos), impedir que se modifique una situación de hecho o de derecho (secuestro preventivo en sucesiones) o asegurar los resultados de una decisión judicial o administrativa futura, mientras se adelante y concluye la actuación respectiva, situaciones que de otra forma quedarían desprotegidas ante la no improbable actividad o conducta maliciosa del actual o eventual obligado*”. (Sentencia T 172 de 2016).

PRIMERO: REFORMAR el auto calendado el catorce (14) de julio de dos mil veintidós (2.022), proferido por el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS de Medellín, precisando que lo dispuesto sólo es la COMISIÓN para materializar el secuestro dispuesto en el auto del 17 de septiembre de 2.018.

SEGUNDO: Sin costas en relación al recurso aquí resuelto.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, vuelva el expediente al Despacho de origen.

Notifíquese:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'José Omar Bohórquez Vidueñas', written in a cursive style.

JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS
MAGISTRADO